

Sustentabilidad ambiental en la producción de soja en Argentina, ¿un camino posible?

Alejandro D. Brown, Presidente ProYungas



Foto: RTRS

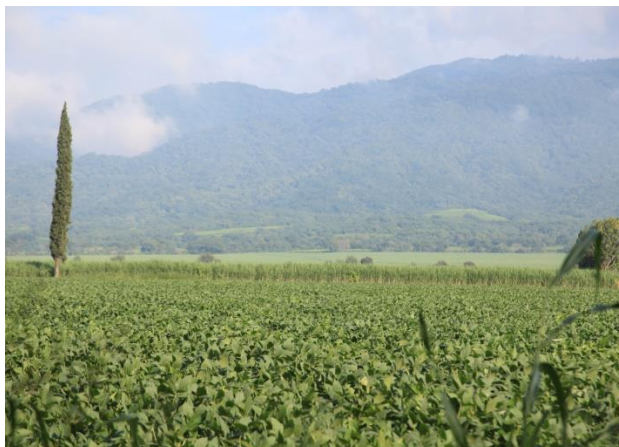
¿Qué significa la soja para la economía argentina?

La soja está para quedarse en la Argentina y planea expandirse aún más en los próximos años y además impulsar la expansión de otras actividades productivas, como la ganadería a nuevos territorios. De tal manera que en la última década ha generado escenarios económicos, sociales y ambientales impensados para la Argentina en aquellos primeros años de instalación de este cultivo en el país.

La soja hoy ocupa 20 de los 30 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura intensiva en la Argentina, desplazando a otros cultivos y a la ganadería de muchos de sus espacios tradicionales, empujando la frontera agropecuaria hacia áreas de alta biodiversidad y territorios de pueblos originarios, en áreas de “vocación forestal” impensables para la agricultura o la ganadería intensiva décadas atrás.

La creciente demanda de China de materia primas y en menor medida de la Unión Europea son los grandes impulsores de este cultivo en América, como ocurre con el cultivo de la palma aceitera en el sudeste asiático. Las mismas problemáticas reúnen a ambos cultivos y eso impulsó el desarrollo de un taller sobre “Soja y Aceite de Palma responsables” realizado recientemente en Amsterdam, Holanda, organizado por la Alianza de Ecosistemas, una coalición de ONGs holandesas que tiene su correlato en una serie de ONGs de los países productores de estos cultivos, entre ellos la Argentina.

El 96% de la producción de soja argentina (unos 50 millones de toneladas) se exporta bajo la forma de poroto, harina, aceite o biocombustible, representando el complejo más importante de la balanza comercial del país. En 2013 las exportaciones argentinas totales ascendieron a u\$s81.600 millones, con una participación del sector agropecuario y agroindustrial de u\$s48.000 millones, de los cuales la soja fue responsable de exportaciones por u\$s21 mil millones, es decir el 25% del total. De esta forma, el complejo soja lidera las ventas externas del país. Le sigue el sector automotriz (u\$s11.600 millones), el cerealero (u\$s9.400 millones), el petrolero petroquímico (u\$s6.400 millones), las exportaciones de carne y leche (u\$s4.000 millones) y las del sector frutihortícola (u\$s2.400 millones).



Los embarques del complejo soja se destinan a más de 100 países. Entre los grandes puntos de llegada se destaca China, que compra en la Argentina un

20% de sus importaciones de poroto de soja. A su vez, la Unión Europea es el gran destino de la harina de soja argentina, comprando el 11% de la soja mundial (de Brasil, Argentina y EEUU). Gran parte del volumen comprado por la UE es importando por Holanda y de ahí su interés en el tema.

Estas cifras, que evidencian los avances logrados en los últimos diez años en nuestro país, se sustentan en los nuevos desarrollos biotecnológicos, que asociados a los aportes de la genética convencional y a la tecnología de cultivo permitieron acelerar la obtención de variedades mejoradas con muy alto potencial de rendimiento y resistencia a factores bióticos y abióticos.

El derrame económico de la cadena de la soja es difícil de medir correctamente. Considerando sólo los viajes a puertos que se realizan para transportar el 80% de la producción nacional, dado que hay soja que se procesa en complejos del interior, se

realizan 1,4 millón de traslados en camión, por un valor aproximado de u\$s1.200 millones al año.

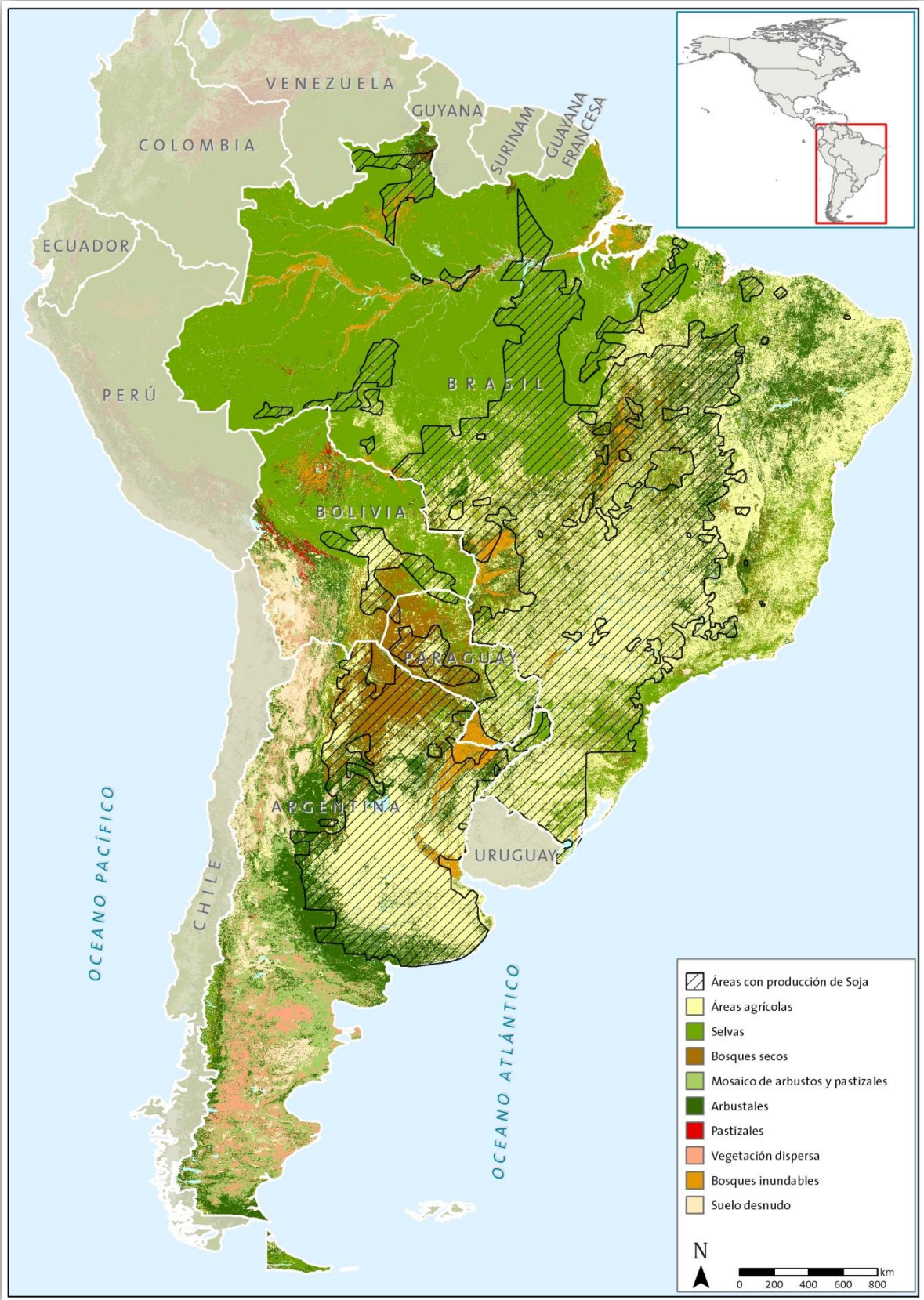
El sector industrial es otro de los eslabones destacados de la cadena de la soja argentina. Actualmente procesa el 77% de la producción nacional, generando un valor agregado adicional de u\$s5.000 millones por año. En los últimos 10 años, la capacidad de molienda se duplicó, al pasar del orden de los 30 millones de toneladas a los más de 60 actuales. Esto implicó inversiones por varios miles de millones de dólares, que en el caso de la industria del biodiésel rondó los u\$s1.000 millones. La mayoría de esas industrias se encuentran ensambladas en terminales portuarias que hoy se destacan entre las más modernas del mundo y generan trabajo directo para miles de personas, tal lo mencionado por dirigentes de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).

Aunque menos espectacular y de difícil cuantificación, uno de los mayores aportes del sector ha sido, y seguramente seguirá siendo en los años por venir, la formación continua de recursos humanos con capacidad para sostener el funcionamiento de todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva y su mejora constante.

¿Cuáles son los principales problemas de la expansión de la soja?

Esta expansión explosiva de la soja en nuestro país ha implicado para la región del Gran Chaco Americano, ecoregión que compartimos con Paraguay, Bolivia y un poco con Brasil, la deforestación de alrededor de 5 millones de hectáreas en la última década. Sólo en Argentina, donde la deforestación se concentra en un 90% en la región chaqueña, durante el boom de la expansión sojera se desmontaron unas 400.000 ha/año. Como contrapartida de esto, esta región es una de las menos representadas en el Sistema de Áreas Protegidas del país, con menos del 3% de su superficie protegida, cuando los estándares internacionales sugieren al menos el 10%, estándares a los que Argentina se adhirió oportunamente a partir de la firma del Convenio de Diversidad Biológica. Además en general las reservas existentes son de tamaño insuficiente y no tienen asegurada la conectividad entre sí, para lo cual hay que desarrollar una política de “corredores ecológicos”.

También la expansión de la soja puso al descubierto la situación de indefinición con que muchas comunidades aborígenes de las etnias wichí, toba, pilagá, habitantes ancestrales de la región chaqueña, tienen sobre sus territorios. Un reciente relevamiento que aún no finalizamos, nos indica que en esta región habitan al menos 600 comunidades aborígenes de 15 etnias. Lo mismo ocurre con los criollos, habitantes del interior del bosque chaqueño dedicados a la “ganadería de monte”.

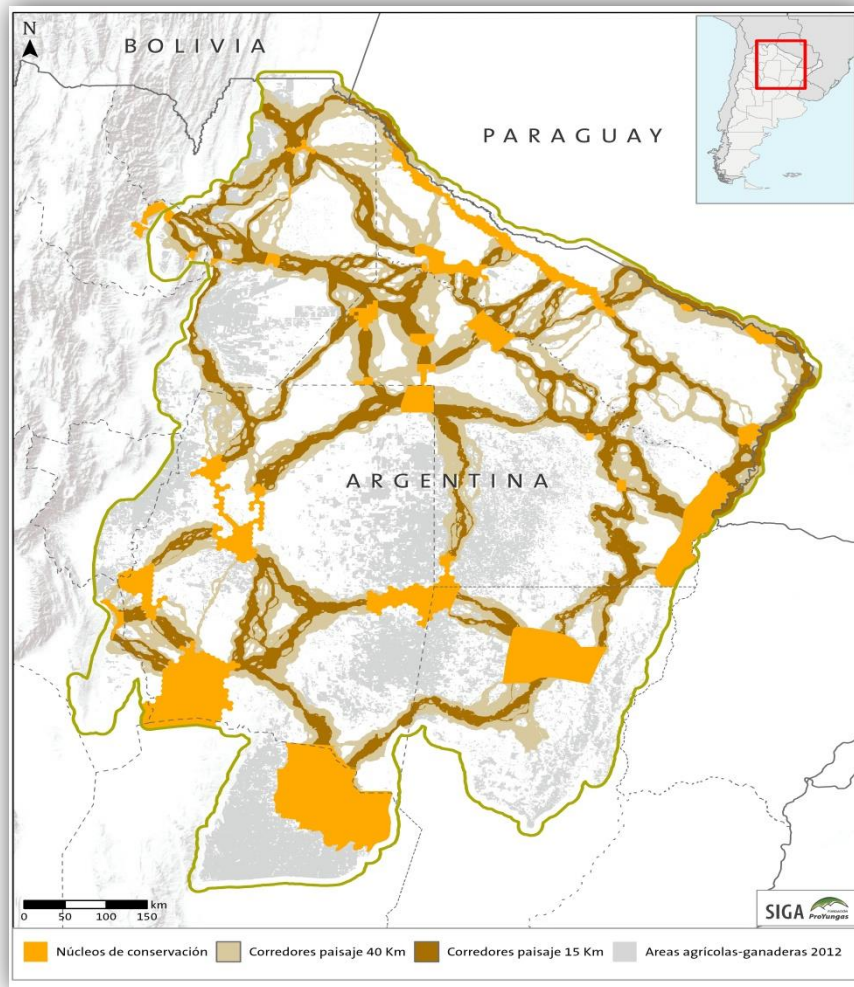


El desecamiento de humedales, la contaminación del agua y del aire, la concentración de la tierra, están también entre los principales impactos negativos que se le atribuyen a dicha actividad.

¿La “sustentabilidad” es posible?

Cuando el sector productivo habla de sustentabilidad se refiere mayormente a la sustentabilidad de la propia actividad productiva, es decir mantener o mejorar los rindes, conservar el suelo, utilizar adecuadamente los recursos hídricos etc. Para ello tiene desarrollada una batería de buenas prácticas entre las que se destacan la siembra directa (de la que el país es pionero) y la rotación de cultivos. Esto último de limitada implementación en las regiones críticas de norte argentino, habida cuenta que ningún cultivo posee la rentabilidad de la soja, que le permita afrontar la fuerte carga impositiva y el importante costo del flete hasta el puerto de Rosario. Se podría decir restricciones económicas a la sustentabilidad.

Por otro lado, cuando el sector ambiental habla de sustentabilidad mayormente habla del mantenimiento de los “bienes y servicios” de la naturaleza, es decir la biodiversidad, la calidad del agua de los humedales, la liberación del carbono acumulado en los bosques y el respeto a los territorios de comunidades rurales. En los



ambientes del subtrópico, donde la soja se ha expandido esta última década, se concentran las áreas de mayor biodiversidad, los grandes humedales y las áreas de mayor concentración y diversidad indígenas.

Estas dos visiones de sustentabilidad son correctas y complementarias, y ambas son necesarias. La respuesta a esta aparente dicotomía está en el ordenamiento territorial, un ordenamiento como el contemplado en la Ley Nacional de Bosques Nativos, realizado a la escala de los territorios provinciales, pero que requiere que dicho ordenamiento sea llevado a la escala de los predios o “paisajes”, generando espacios de planificación territorial que permitan asegurar que el propio desarrollo económico impulse las buenas prácticas agropecuarias, el mantenimiento de áreas de protección de la biodiversidad y la solución de conflictos territoriales con las poblaciones locales. Ello amparado en instrumentos legales impulsados por las autoridades de aplicación provinciales y monitoreado por estructuras institucionales independientes, garantizando la transparencia de este proceso y fundamentalmente su evaluación que permita generar las correcciones necesarias y oportunas.

Como en todo finalmente, la solución está en el diálogo, en la construcción conjunta y el respeto a los distintos puntos de vista e intereses, sin duda la base de la sustentabilidad.